



**Grupo Temático N° 16: Identidades, intereses y estrategias en los conflictos sociales**  
**Coordinadores: Federico Schuster y Martín Armelino**

---

**“Pivoteando entre la precarización y el empleo estatal. Sindicatos y movimientos sociales  
en las disputas por el trabajo en Jujuy”**

**Autor/es: Virginia Manzano**

**E – mails: virginiamanzan@gmail.com**

**Autor/es: Florencia Ferrari**

**E – mails: filiferrari@hotmail.com**

**Pertenencia institucional: UBA/ CONICET/UNQ**

**Introducción**

Con la reducción de niveles del desempleo abierto en Argentina, se registran distintas y variadas formas de inserción social y laboral. Una de ellas, quizás todavía poco explorada, es aquella mediante la cual las personas, que otrora pertenecieron a movimientos de desocupados o familiares de la siguiente generación a la de esos sujetos movilizados, se emplean en tareas que requieren distinto tipo de políticas públicas. El acceso a ese tipo de empleos suele enraizar en la participación política de las personas y, al mismo tiempo, se convierte en objeto de lucha política orientada a estabilizar y formalizar esas prestaciones bajo la forma de empleo público. Esta situación nos abre una serie de interrogantes de orden más general acerca de la precarización y sus características; la paradoja entre Estados visiblemente fuertes en comparación con las construcciones estatales de los noventa pero apoyándose parcialmente en procesos de precarización social; y los modos en que sindicatos y movimientos sociales se vinculan con los precarizados. En suma, se trata de dar cuenta de los procesos de precarización así como también de las alternativas colectivas frente a ellos. Estos dilemas los abordaremos mediante un estudio etnográfico con los sindicatos SEOM

(Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y con el movimiento social Tupac Amaru, todos ellos en la provincia de Jujuy, puesto que reúnen dos elementos interesantes y sobresalientes: una historia de lucha colectiva continua que pivotea entre el empleo, el desempleo y la precarización, y una construcción estatal que históricamente se caracterizó por absorber la fuerza de trabajo sobrante de los procesos de trabajo capitalistas.

Tanto el SEOM como ATE (asociación desde la cual surge el Movimiento Tupac Amaru) integraron, desde su fundación a fines de la década de 1980, el Frente de Gremios Estatales (FGE) que nucleaba y representaba a los trabajadores estatales de la provincia. A lo largo de la década, estos trabajadores protagonizaron diversos conflictos que giraron en torno al empleo público y los salarios aunque, con el correr de los años, incorporaron varias demandas de la sociedad jujeña, transformándose en una “caja de resonancia” de los problemas en la provincia. Ante el crecimiento de la desocupación, tejieron una política de alianza con los trabajadores desocupados, que respondía a las posturas adoptadas por la CTA y la CCC en torno a la importancia de ampliar su representación sindical para incluir a las ramas de jubilados y desocupados. En este marco, ambos gremios vienen propiciando la inclusión de los trabajadores precarizados en sus espacios sindicales. De diversas maneras, intentan volver visible el problema de la precarización, las condiciones de vida y de trabajo de los precarizados y reclaman el pase a planta permanente de estos trabajadores. Por su parte, la Organización Barrial Tupac Amaru viene creando puestos de trabajo con fondos de políticas públicas en cooperativas y en distintos emprendimientos, replanteando el límite entre actividades que deben ser consideradas como trabajo estatal. De diferentes maneras, tanto los sindicatos como este movimiento social están llevando adelante una disputa con el Estado, en sus distintos niveles, en torno al alcance del trabajo estatal.

Para dar cuenta de estos puntos, nos basaremos sobre los datos construidos en trabajos de campo de corte etnográfico en Jujuy. En un caso, se trató de una estadía con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales durante el año 2013 y en el otro con la Organización Barrial Tupac Amaru durante octubre de 2014. En el transcurso del trabajo de campo se utilizaron estrategias como la observación, la entrevista cualitativa y la reconstrucción de fuentes secundarias.

## **La conformación del Frente de Gremios Estatales: escenarios de disputa y estructura económica jujeña**

*“La crisis económico-financiera por la que atraviesa nuestra provincia, forma parte de la crisis en la cual se encuentra inmersa la Nación, como consecuencia de la aplicación de políticas que desincentivan la producción, favorecen la especulación financiera, desconocen las conquistas gremiales, promueven la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, con el exclusivo fin de sumergir al pueblo trabajador en la angustia económica, la frustración cívica y someter así al país a intereses extranjeros, políticas que se continúan desde 1976” (en Aramayo, 2009: 335).*

Este es el primer punto del diagnóstico hecho por el Frente de Gremios Estatales (FGE) a la situación en la que se encontraba la provincia de Jujuy en el año 1988. Para los trabajadores que integraban dicho frente, fundado ese mismo año, se trató del comienzo de un proceso de lucha y de construcción de unidad que se extendió por más de diez años. En este apartado, presentaremos la fundación del FGE y su consolidación como uno de los protagonistas más relevantes de la resistencia a la consolidación del neoliberalismo en la provincia a la luz de las particularidades de la estructura económica jujeña, el impacto de las políticas neoliberales y la importancia que fue adquiriendo el empleo público.

Iñigo Carrera y Gómez (2011) señalan que el paro con movilización del 3 de mayo de 1988 es la fecha de nacimiento del FGE. Inicialmente conformado por una diversidad de sindicatos<sup>1</sup>, luego se consolidó un “núcleo duro” integrado por los siguientes gremios, de mayor poder de convocatoria y movilización: SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad), CEDEMS (Centro de Educadores y Docentes de la Enseñanza Media y Superior), ADEP (Asociación de Docentes y Educadores Provinciales) y APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública).

A partir de fines de la década de 1980, su actividad fue incansable: los conflictos se sucedían año a año, al calor del empeoramiento de las condiciones de vida y de la crisis

---

<sup>1</sup> Los autores mencionan los siguientes sindicatos: ATE, ATSA, ADEP, CEDEMS, SEOM, SOEME, OS, Viales Provinciales, Judiciales, Legislativos, Luz y Fuerza, Rentas, Inmuebles y Tribunal de Cuentas (Iñigo Carrera y Gómez, 2011).

política en la que se sumergía la provincia<sup>2</sup>. La lucha se desarrolló de formas variadas: paros de brazos caídos, paros parciales con salida a la calle, manifestaciones de 5.000 a 10.000 personas, ollas populares, ocupaciones de edificios, enfrentamientos con la policía, huelgas de hambre, convocatoria a Cabildo Abierto (Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo, 2009). En este sentido, una de las particularidades de la provincia de Jujuy, a diferencia de lo que sucedía en otros puntos del país durante los '90, es la alta conflictividad que se mantuvo a lo largo de la década, junto a la intensa participación del Frente de Gremios Estatales (FGE) en todos los conflictos (Piva, 2009).

Es relevante destacar la diversidad de corrientes sindicales y confederaciones a las que estos sindicatos estaban vinculados, que confluyeron en la gestación del frente: el SEOM y el CEDEMS estaban vinculados a la CCC (Corriente Clasista y Combativa); ADEP y ATE estaban ligados a la CTA (Central de Trabajadores Argentinos); ATSA, vinculado a la CGT (Confederación General del Trabajo) (Gómez y Kindgard, 1998). Esta diversidad de tradiciones e identidades sindicales se conjugó, al mismo tiempo, con una diversidad de profesiones, tareas y escalafones; en una palabra, con una diversidad de formas de trabajo, trayectorias y de experiencias laborales que, como dijimos, confluyeron en el espacio articulador del FGE.

Por lo tanto, la conformación del FGE supuso la vocación política de construcción de una unidad que los integrara y que les permitiera llevar adelante los reclamos y las reivindicaciones en el marco de políticas de ajuste. En otro trabajo (Ferrari, 2015) señalamos que uno de los factores que les permitió unificar las demandas fue el salario. Así lo recordaba uno de los trabajadores municipales, Teodosio, que integró el frente y la CCC durante la década de 1990, y a quien entrevistamos en calidad de miembro del SEOM en diciembre de 2013:

---

<sup>2</sup> Pensemos que, en el período de diez años, cuatro gobernadores renunciaron a sus cargos antes de terminar sus mandatos, producto del descontento popular y de las tensiones y disputas dentro del propio partido gobernante (Partido Justicialista): De Aparici, Domínguez, Fico seco y Ferraro. A partir de 1983 se sucedieron los siguientes gobernadores: Snopek, C. (1983-1987); De Aparici, R. (1987- 1990); Alderete, E. (1990-1991); Domínguez, R. (1991-1993); Fico seco, J. (1993-1994); Perassi, O. (1994-1995); Snopek, G. (1995-1996); Ferraro, C. (1996-1998); Fellner (1998-1999). La victoria de Fellner, como desarrollaremos más adelante, marca el inicio de una cierta estabilidad política en la provincia (Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy, [www.tribelectoraljujuy.gov.ar](http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar)).



*“(…) y lógico, nosotros estábamos, cada sindicato iba por ... (…) Por separado, con sus reivindicaciones separadas. Las enfermeras hablaban de un plus de insalubridad, por ejemplo, cosa que no nos llenaba a todos, porque nosotros teníamos ciertos sectores de insalubridad, pero no todos (...) Entonces, eh ... los los maestros iban con otras reivindicaciones, pero después teníamos que buscarle el sentido (con énfasis) común a la a la lucha, ¿cuál es el sentido común de esta situación? Y nos constituimos en el frente. Era el sueldo. El salario, la crisis que pasaba, que era pareja, no miraba a qué gremio era ni qué partido era, la enfermedad, esas cosas han hecho que nosotros converjamos en el Frente de Gremios Estatales” (entrevista Teodoro).*

De esta manera, la disputa por el salario (y el empleo estatal) les permitió unificar perspectivas y sentar las bases para articular las demandas. Sin embargo, es importante no perder de vista que, tal como señalan Barzola y otros (2013), toda discusión salarial en el marco del empleo estatal es, implícita o explícitamente, una discusión sobre el presupuesto y las erogaciones del Estado. En este sentido, frente a las razones esgrimidas por el gobierno de falta de fondos para pagar o aumentar los sueldos de los trabajadores estatales, el FGE llevaba adelante sus reclamos acompañándolos de diferentes propuestas para salir de la crisis y para aumentar la recaudación estatal, que incluían la modificación de la política tributaria jujeña a partir de la consideración de la capacidad de pago de las empresas y terratenientes (proyectos de ley de emergencia impositiva), el arrendamiento forzoso de tierras ociosas e improductivas, la creación de un Fondo de Reparación Histórica para Jujuy a cargo de la Nación, entre otras (Aramayo, 2009).

Con estos reclamos y propuestas, los trabajadores unidos en el FGE comenzaron a impugnar no sólo el presupuesto del Estado sino también la aplicación de políticas neoliberales, tanto a nivel provincial como nacional. Es decir, en la discusión sobre el presupuesto se cuestionaba y se ponía sobre el tapete, al mismo tiempo, la situación de la provincia no sólo en términos del empleo estatal y las condiciones de trabajo y salariales, sino también la situación de la salud y la educación, la actividad económica y el empleo. De ahí que, como sostenía Carlos “el Perro” Santillán en una entrevista, el FGE se convirtió en una “caja de resonancia” de la situación de la provincia y del malestar de los jujeños:



*“Surgió acá en Jujuy un Frente de Gremios Estatales que pasó a ser la caja de resonancia de todos los problemas que tenía la provincia. No solamente las reivindicaciones puntuales en eh que eran cobrar el salario o tener la posibilidad de algún aumento, lo que pasaba en un barrio con el tema de la falta de salud, de la falta de educación eh, ese frente lo representaba como como una figura que tenía mucho peso en la sociedad, en la sociedad jujeña” (entrevista a Santillán<sup>3</sup>).*

La capacidad de los estatales de universalizar sus reclamos en tanto vendedores de su fuerza de trabajo al Estado (Piva, 2009) y combinarlos con el reclamo de otros sectores sociales, organizados en Multisectoriales, (como comerciantes, productores, centros vecinales, colegios profesionales, estudiantes universitarios, entre otros) favoreció la gestación de alianzas y una política de “unidad en la acción”. Así, por ejemplo, Fernando “Nando” Acosta, de ATE, en una entrevista con medios nacionales, sostenía: *“También estamos quitándole fondos [con sus reclamos] a la corrupción y a esta política de privilegios. Las empresas que más gente despiden (...) son las que más se ven beneficiadas con rebajas impositivas”*<sup>4</sup>. De esta manera, diferentes sectores y actores sociales comenzaron a confluir en los reclamos, a partir de la capacidad de los estatales para vincular su situación particular a otras problemáticas asociadas a la aplicación de las recetas neoliberales (deficiencias en la salud y educación, situación de pequeños productores y comerciantes por la apertura económica, entre otros) y la corrupción de los funcionarios del Estado.

Pero, íntimamente relacionado con lo anterior, también los estatales estaban cuestionando, en mayor o menor medida, la propia estructura económica de Jujuy, monopólica, concentrada y latifundista y los vínculos del Estado provincial con las grandes empresas y grupos económicos. Para poder entender la crisis en la que se sumergió la provincia en la década de 1990 y la alta conflictividad de esos años es necesario considerar las particularidades de la estructura económica y el impacto que tuvieron las políticas neoliberales. Al mismo tiempo, ambos elementos son también los que permiten entender la

---

<sup>3</sup> Comisión de Derechos Humanos de Jujuy - YouTube. Disponible en:  
[http://www.youtube.com/watch?v=OTE5ja2U\\_yk&list=UUDZjP-bvF8-2EY86E\\_YP59A](http://www.youtube.com/watch?v=OTE5ja2U_yk&list=UUDZjP-bvF8-2EY86E_YP59A)  
Consultado: 08/2014

<sup>4</sup> Entrevista en Apuntes de Lucha, grupo Wayruro Comunicación.

centralidad del empleo estatal en la provincia y el rol desempeñado por el Estado como agente regulador del conflicto (Ogando, 1998).

Decíamos entonces que la estructura económica jujeña se caracteriza por el carácter monopólico y concentrado del sector productivo privado, con escasa presencia de pequeñas y medianas empresas, y la estructura latifundista en el campo. Las dos actividades centrales -la industria azucarera y sus derivados- presentan un alto grado de concentración productiva y centralización de capital (Aramayo, 2009). Producto de esta centralización y concentración económica, de la crisis de otras áreas (como la minería) y de un proceso de “expulsión” de mano de obra de los ingenios, el Estado fue adquiriendo un rol central como generador de empleo (Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo, 2009; Ogando, 1998), a partir de la década de 1970. Jujuy poseía una de las tasas de empleo público más elevadas del país<sup>5</sup> aunque también es importante destacar que los salarios de estos trabajadores eran uno de los más bajos (Ogando, 1998).

La aplicación de políticas neoliberales intensificó la concentración económica y la expulsión de trabajadores (generalizándose también a otras actividades la aplicación de tecnologías ahorradoras de mano de obra, como una estrategia a adoptar para reducir costos y poder competir con productos importados<sup>6</sup>) que, sumadas a las privatizaciones<sup>7</sup>, provocaron el aumento de la desocupación. De acuerdo a las cifras registradas por el INDEC para el aglomerado urbano San Salvador de Jujuy – Palpalá, la tasa de desocupación fue creciendo, alcanzando los siguientes valores: 7,1% (1989), 18% (1997) y 16,3% (1999). Por otro lado, y en relación con la tasa de subocupación, la misma aumentó de 7,7 en mayo de 1994 a 10,4 en mayo de 1999. El aumento de la desocupación se vio acompañado por una importante disminución de los salarios, el aumento de la informalidad y la precarización de las condiciones de trabajo (Iñigo Carrera y Gómez, 2011).

Al mismo tiempo, la estrategia estatal de absorción de trabajadores expulsados como una manera de regular el conflicto se enfrentó a los límites impuestos por las políticas que

---

<sup>5</sup> Remitimos al trabajo de Aramayo (2009), quien lleva adelante un análisis del aumento del empleo público a partir de la década de 1980.

<sup>6</sup> Ver, por ejemplo, los trabajos de Bergesio y Marcoleri (2008) y Golovanevsky y Sala (2001) al respecto.

<sup>7</sup> En Jujuy se privatizaron Altos Hornos Zapla, YPF, Agua y Energía (EJESA), Banco Provincia de Jujuy (Banco de Jujuy) y el Instituto de Previsión Social (Ogando, 1998).

enfaticaban el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. Además, deben también considerarse la firma de los Pactos Fiscales y la modificación de los fondos de coparticipación federal disponibles, de los que Jujuy dependía para la mayoría de sus erogaciones (Golovanevsky y Sala, 2001) y las características de la política tributaria de la provincia que, siguiendo a Aramayo (2009) beneficiaba a los grandes grupos económicos y empresas.

Se fue gestando, entonces, un escenario para la disputa por el empleo y por la intervención estatal para el mejoramiento de las condiciones de vida en el que convergieron los sindicatos estatales nucleados en el FGE, diferentes sectores sociales -organizados en Multisectoriales- y trabajadores desocupados, que irrumpieron con fuerza a partir de 1997. La alta conflictividad de la provincia durante la década de 1990, mencionada anteriormente, debe ser pensada en torno a estas tensiones entre la estructura económica, el rol del Estado como generador de empleo, los fondos estatales disponibles y la aplicación de políticas de equilibrio fiscal y reducción del gasto público. Dos gremios que integraban el FGE -SEOM y ATE- desarrollaron importantes vínculos con los trabajadores desocupados, participando de su organización y de sus reclamos. Este aspecto será desarrollado a continuación.

### **La relación del empleo público y la desocupación: SEOM, ATE y la organización de los desocupados**

Los sindicatos estatales de Jujuy participaron activamente, y en parte fueron también creadores, de estrategias gremiales que se orientaban a organizar a la población desocupada. Estrategias que se encarnaron en actores sociales ligados a la Central de Trabajadores de la Argentina y a la Corriente Clasista y Combativa.

Como reconstruimos en una investigación previa (Manzano, 2013), la desocupación fue uno de los temas tratados durante un encuentro sindical celebrado el 17 de diciembre de 1991 en la localidad bonaerense de Burzaco, que contó con una presencia mayoritaria de dirigentes gremiales de sindicatos estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado y entidades de docentes. En esa oportunidad se definió al desempleo como una de las consecuencias de *“la ofensiva neoliberal sobre el conjunto de los trabajadores y el pueblo”*. Al mismo tiempo, se fijó como meta la construcción de un *“nuevo modelo sindical”*, inserto





dentro de un movimiento político y social abierto a otras organizaciones sociales que expresaran las múltiples demandas de los “sectores populares” y que reflejaran la realidad de “cinco millones de argentinos con problemas de empleo” (Debate para la organización de los Trabajadores, 1991).

En 1992, el núcleo de gremialistas reunidos en Burzaco fundó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, y en 1996 se organizó como CTA. Con la constitución de la nueva entidad sindical, la *desocupación* se transformó en “*una prioridad para la lucha*”, a partir de una lectura que caracterizaba al desempleo como la consecuencia de un proyecto de acumulación propiciado por grandes grupos económicos antes que como resultado de cambios tecnológicos en los procesos de trabajo. Los lineamientos de esta política sindical se tradujeron en un reelaboración de la figura del trabajador orientada a incorporar a *los activos*, *los jubilados* y *los desocupados*, y, fundamentalmente, en la extensión de la acción gremial al espacio barrial/territorial, a fin de incluir temas no sólo relacionados con el mundo laboral sino también con otros “*derechos elementales*”, como la salud, la educación, la tierra y la vivienda:

A la par de la CTA, la CCC resultó otra experiencia que definió progresivamente a la desocupación como eje de organización y acción sindical. Esta organización se concebía como una corriente político-gremial cuyo objetivo era el trabajo dentro de todos los sindicatos y las centrales sindicales para lograr la adhesión de delegados y “agrupaciones de base”. A nivel político, se hallaba vinculada al Partido Comunista Revolucionario, de orientación maoísta.

Si bien la autodefinition “corriente clasista” intentaba enfatizar la continuidad con tendencias históricas de organización del movimiento obrero argentino, la CCC se constituyó en el año 1994 en un acto celebrado en el salón Verdi del barrio de La Boca. En ese evento confluyeron, entre otros, integrantes de juntas vecinales, trabajadores municipales de Jujuy y Tucumán, delegados gremiales del Astillero Río Santiago y de Siderca, y agrupamientos de médicos y docentes de diferentes distritos del país. La conformación de la CCC estuvo enmarcada en el “análisis de la realidad política” del Partido Comunista Revolucionario, el cual definió una triple crisis –económica, social y política–, cuya causa era la sobreproducción del sistema capitalista a nivel mundial, y diagnosticó el “auge de masas”, sobre todo luego de

los hechos ocurridos en la provincia de Santiago del Estero en diciembre de 1993, conocidos como “Santiagueñazo”. En virtud de estas caracterizaciones, su propuesta se concentró en abandonar la participación en elecciones con listas de candidatos, llamar al voto nulo o blanco, e impulsar “puebladas”. Esto último se bautizó como la “lucha por el Argentinazo”, entendida como una “pueblada nacional” que retomaba el modelo del “Cordobazo” de 1969.

En 1999 se difundió un documento en el que se definió a la desocupación como una situación “(...) *impuesta al conjunto de la clase obrera, producto de una ‘modernización’ reaccionaria basada en el atraso y la dependencia*” (Alderete y Gómez, 1999: 3). Asumir el problema de la desocupación como un eje para el desarrollo de estrategias políticas implicó precisar la definición de la “clase obrera”. En la visión de la CCC, los desocupados eran definidos como una “fracción de la clase obrera” y, en términos gremiales, como un “afluente” del movimiento obrero junto con los jubilados y *los ocupados*.

Recapitulando, a lo largo de la década del 90, tanto la CTA como la CCC incorporaron la desocupación dentro de sus agendas, contribuyendo a transformar ese problema en un eje de organización gremial y política. En ese sentido, redefinieron la *figura del trabajador, la clase obrera o el movimiento obrero* para incorporar a los desocupados y subocupados en los marcos de representación sindical.

En el caso del Gran Buenos Aires, como hemos dado cuenta de manera detallada en otras investigaciones (Manzano, 2013), la estrategia de organizar a los desocupados la llevaron adelante personal del Estado en general, médicos y maestros mediante sus vínculos con dirigentes barriales que habían protagonizado tomas de tierras durante la década del ’80, quienes también estaban vinculados con integrantes de comunidades eclesiales de base. Así, el movimiento de desocupados se consolidó en los barrios logrando una fisonomía particular que en parte desdibujó el incipiente apoyo sindical para su conformación. Distinto parece haber sido el caso en Jujuy donde la impronta sindical permeó con su tonalidad específica al modo de organización de los desocupados, dando una fuerza particular a la Corriente Clasista y Combativa y a la organización barrial Tupac Amaru inicialmente enmarcada en la Asociación de Trabajadores del Estado, ambas hacia la década del 90 incorporadas al Frente de Gremios Estatales.

Esta fuerte vinculación puede apreciarse en los conflictos de fines de la década de 1990, como la Marcha de la Dignidad de 1996 y el llamado Jujeñazo de 1997, en los que el FGE participó activamente en solidaridad con los desocupados que protestaban. Así, desde el 19 al 31 de mayo de 1997, se produjeron más de veinte cortes de ruta en toda la provincia, que fueron acompañados por manifestaciones, paros del FGE, cortes de calle y puentes en la capital provincial. Los numerosos reclamos estaban vinculados a la creación de puestos de trabajo, el otorgamiento de subsidios para los desocupados, la jubilación anticipada de aquellos trabajadores que contaran con treinta años de aportes, la implementación de planes o la exención del pago de impuestos, servicios y cuotas de viviendas, el desarrollo de un plan de obras públicas, la reactivación de las actividades agrícolas, la convertibilidad de los bonos, la creación de un Fondo de Reparación Histórica para la provincia, la regularización del pago de haberes (Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo, 2009; Piva, 2009; Gómez y Kindgard, 1998). Se destaca la adhesión de los trabajadores desocupados al programa del FGE antes mencionado, fundamentalmente las propuestas de tierras ociosas y de emergencia impositiva y la colaboración del FGE -y especialmente del SEOM<sup>8</sup>- en la articulación de las distintas coordinadoras de desocupados que iban surgiendo, y en la iniciativa de conformar la Comisión Coordinadora de Piqueteros y Desocupados.

En el año 2014 la Organización Barrial Tupac Amaru, ya consolidada como uno de los movimientos sociales más incisivos de la Argentina, celebró su quince aniversario. En el Balance de actividades de 2014, Milagro Sala sostuvo: “Miremos cómo estábamos algunos años atrás, en que situación nos dejaron aquellos que hoy se llenan la boca prometiendo soluciones que nunca trajeron cuando fueron gobierno. Nosotros nacimos en ese entonces: gracias a las incoherencias y la torpeza de los sectores políticos, de Fernando De La Rúa, Gerardo Morales, Carlos Menem, Eduardo Duhalde. Fuimos consecuencia de esa gran crisis en la que miles de compañeros estaban sin trabajo, pasando hambre, con un sistema educativo y de salud que no llegaba a cubrir las necesidades que muchos teníamos” (Tupac Amaru, Anuario 2014, página 2).

---

<sup>8</sup> Iñigo Carrera y Gómez (2011) afirman al respecto “Aunque en los cortes de 1997 comenzó a surgir la CCC como organizadora de los desocupados, en la mayoría de ellos la tarea organizativa recayó en militantes vinculados a Santillán, en tanto SEOM y FGE” (2011: 165).

Tal como establecen las narrativas del propio movimiento así como los relatos académicos, la Tupac Amaru se constituye como tal hacia el año 1999 (Battezzatti, 2012). Comúnmente los relatos acentúan la labor de Milagro Sala como secretaria de organización de Ate Jujuy, integrante de la CTA, destacando su manera de poner el cuerpo en movilizaciones, de denunciar, reclamar, y en su trayectoria de vida en la que se destacan las situaciones en las que vivió en la calle, su paso por la cárcel en donde encabezó reclamos por las condiciones en las que se encontraban con sus compañeras. En esos relatos aparece menos trabajado, en cambio, otro aspecto que nos comentaron informalmente integrantes de la Tupac Amaru, como fueron las pasantías de los miembros de ATE Jujuy, tal fue el caso de Milagro Sala entre otros, en en escuelas de cuadros sindicales en Cuba y también la formación con el propio German Abdala.

Más allá de estas diferencias, una evidencia sostenida, como reconstruye la detallada etnografía de María José Camaño (2015), es que a partir de la figura de Milagro Sala, ATE se inserta en barrios muy pobres de San Salvador de Jujuy como Mariano Moreno, Cerro las Rosas y Cuyaya, al mismo tiempo, comienza a brindar un soporte para organizar a los hijos de los empleados estatales que encontraban serias dificultades para ingresar al empleo público. Inicialmente, quienes se nuclean en esos barrios es población muy joven, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 18 años, muchos de ellos con trayectorias de delitos menores e insertos en redes de economía de la droga. Entre varios de ellos compartían la membresía en la “hinchada del Lobo Jujeño”<sup>9</sup>, luego denominada como “la hinchada de la flaca” en alusión a Milagro Sala. Los primeros encuentros se realizan en la “la piccita de ATE”, desde allí una de las primeras consignas que se impulsa como respuesta a la situación de desocupación y escasez de recursos es realizar “copas de leche”<sup>10</sup> para los niños. La demanda de esos bienes se realizaba con formatos de protesta tales como tomas de edificios públicos o acampes en el centro de San Salvador de Jujuy. Tal como nos comentaba un grupo de mujeres durante nuestro trabajo de campo en el año 2014:

---

<sup>9</sup> Así se denomina al equipo de fútbol local Gimnasia y Esgrima de Jujuy del cual Milagro Sala es simpatizante y parte reconocida de su hinchada.

<sup>10</sup> Espacios barriales en donde los jóvenes realizaban hornos de barro y brindaban merienda a los chicos, con recursos que juntaban entre todos o conseguían entre los vecinos.

*“Estamos desde el ‘99, desde la copa de leche, estaba todo tan feo, tan mal, y es como que empezamos con las copas de leche, hacíamos bollos, empanadas, juntábamos plata y con eso hacíamos la copa. Y cuando venían los planes o mercadería, dice Prese, era una fiesta, aunque el plan lo repartíamos entre dos. Se acuerdan que carpeábamos, todo, era mucha lucha”* (Registro de campo, octubre 2014).

Una pregunta que se hacen distintos investigadores es cómo la organización Barrial Tupac Amaru logró la preponderancia que tiene en la actualidad sobre el resto de las organizaciones, independizándose de ATE. Al mismo tiempo, se preguntan por la profunda crisis en que se sumió la CCC. Consideramos que aún resta trabajo en nuestras investigaciones particulares y en las ciencias sociales en general para explicar estos procesos, pero es importante sostener que no se trató simplemente de una caída de la CCC sino de una reconfiguración en múltiples direcciones que trataremos de contextualizar en los apartados que siguen.

### **El SEOM: la refundación del gremio “combativo” y los precarizados**

En el año 2013, Carlos “el Perro” Santillán-liderando la Lista Blanca- ganó las elecciones para la conducción del SEOM. Esta victoria representó el regreso del dirigente al mundo sindical, tras más de diez años de ausencia, durante los que se abocó a la militancia por los derechos humanos y participó de la fundación de las organizaciones barriales y de base Avelino Bazán<sup>11</sup> y Tupaj Katari. Durante la campaña y luego de la victoria, los municipales comenzaron a plantear la necesidad de “refundar” el SEOM, recuperar y (re)crear su rol como sindicato combativo, fuerte en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. En este apartado, desarrollaremos qué implica la refundación del SEOM al mismo tiempo que consideraremos las relaciones que los municipales están entablando con otros sindicatos estatales y con trabajadores precarizados.

En el año 2013, la Lista Blanca ganó las elecciones para la conducción del sindicato con el 68% de los votos. Encabezados por Carlos Santillán, los miembros de esta lista se propusieron como objetivo “refundar” el sindicato combativo, un gremio “*con palabras mayores*” como nos describía uno de los municipales. La comisión directiva electa tiene entre sus miembros tanto a municipales “históricos”, que protagonizaron las luchas de los ‘90,

---

<sup>11</sup> Tanto la Agrupación Barrial Avelino Bazán como la Corriente del Pueblo surgen como desprendimientos de la CCC en los primeros años del 2000 (Iñigo Carrera y Gómez, 2011).

como a jóvenes que están comenzando su participación en el universo sindical. Estos últimos destacan que son los primeros los que “*tienen que guiar, pasarles la experiencia de lucha, nosotros tenemos que hacer*” (conversación con Aníbal, joven municipal). “*Y bueno, ahora bueno llegamos aquí con esta experiencia, tratando de hacer (corta) Ahí tenemos compañeros jóvenes ahora*” (entrevista Teodoro, municipal “histórico”). Esta confluencia y encuentro de generaciones que se está dando en el espacio del SEOM es pensada en términos de aportes diferentes a la reconstrucción del gremio: la experiencia de los “históricos”, por un lado, y la “garra” y la energía de los jóvenes, por el otro.

Pero, ¿qué implica “refundar” el sindicato? ¿Qué elementos están poniendo en juego los municipales al proponerse esta tarea? ¿Qué es lo que se busca (re)crear? Para poder responder a estos interrogantes, es necesario remontarse en la historia municipal y pensar la victoria de Santillán como un regreso al sindicato, como dijimos, tras más de diez años de ausencia. De igual manera, comprender su regreso implica entender su llegada, durante un proceso de “recuperación” del sindicato a fines de la década de 1980. En este sentido, la figura del dirigente está fuertemente asociada a las luchas que el gremio protagonizó durante los '90, luchas motorizadas no sólo por los embates del gobierno en su intento por ajustar las cuentas públicas sino, también, por una dinámica interna que galvanizaba su resistencia.

En las intenciones y objetivos de los municipales de recuperar el sindicato combativo se están poniendo en juego el recuerdo de los trabajadores de ese pasado de “*luchas punzantes y verdaderas*”. Por medio de diversas acciones conmemorativas, el pasado aparece como un elemento necesario de la experiencia actual municipal. Pero no se trata de un pasado vacío, inerte, sino de un pasado actual, con vínculos necesarios con el presente, que puede moldear el por-venir. De esta manera, a través de la conmemoración, pasado, presente y futuro coexisten en el SEOM, puesto que aquello que se conmemora es aquello que se busca recrear de cara al por-venir. El pasado es, en términos de Bergson (en Feirstein, 2012), una ausencia en doble sentido: lo ya-no-presente, la herencia de lucha municipal, y lo aún-no-presente, la esperanza de (re)crear aquel sindicato combativo que (para la) lucha. Es por ello que ese pasado vivido y experimentado como una ausencia funciona, al mismo tiempo, como un horizonte a alcanzar en el futuro, por el que se está trabajando y construyendo en el presente.

Al mismo tiempo, y en relación con lo que mencionamos anteriormente, la figura de Santillán aparece fuertemente asociada a ese pasado del sindicato “*con palabras mayores*”. En el recuerdo de los municipales, el SEOM adopta ciertas características de acuerdo a la presencia o a la ausencia del dirigente. De esta manera, la consolidación del liderazgo de Santillán en los ’90 coincidió con la gestación de una dinámica interna que, en el presente, es también sentida como ausencia y que se está buscando (re)crear. Esta dinámica, que en otro trabajo (Ferrari, 2015) llamamos “la puesta en acción del deber ser del sindicato” está vinculada a la centralidad de la asamblea y los cuerpos de delegados como espacios de discusión, debate y formación y a una ética del compromiso y el respeto y la apertura hacia otros trabajadores, grupos y sectores sociales.

La gestación de esta dinámica y la consolidación del liderazgo de Santillán deben, al mismo tiempo, entenderse en el marco del desarrollo, durante la década de 1990, de una identidad municipal digna y combativa, que gana y consigue respeto en la lucha. Si bien no podremos desarrollar este aspecto debido a que nos centraremos en los vínculos que el SEOM, en la actualidad, está tejiendo con otros grupos, es crucial no perder de vista que parte del anhelo de recuperar el sindicato se vincula a esta identidad que ha ido adquiriendo el SEOM como gremio combativo, que defiende los derechos de los municipales, quienes se ven a sí mismos como trabajadores dignos y bravos. Esta combatividad es entendida como un rasgo central del sindicato y se expresa no sólo puertas adentro, en esta dinámica de la que hablábamos antes, sino también hacia afuera, en las luchas que los municipales protagonizaron durante la consolidación del neoliberalismo y que están llevando adelante en el presente. Luchas en las que los municipales van tejiendo y afianzando lazos con otros grupos, uno de los aspectos más interesantes de la experiencia municipal, que da cuenta de la apertura del gremio y su política de gestación de alianzas.

En la actualidad, además de los vínculos que el SEOM mantiene con el FGE y con el Movimiento Popular La Dignidad, deben también considerarse las relaciones que han entablado con trabajadores precarizados<sup>12</sup> de la provincia, quienes se acercan al gremio a pedir algún tipo de ayuda/asistencia y que están emparentados con algún municipal. De esta

---

<sup>12</sup> Si bien se trata de un concepto de difícil definición, retomamos la propuesta por Basualdo y Esponda (2014), quienes sostienen que la precarización es una situación de trabajo en la que los niveles de estabilidad, remuneración, beneficios sociales y duración de la jornada están por debajo de los estándares.

manera, son los vínculos del municipal con sus familiares, precarizados, los que permiten comenzar a explicar las razones del apoyo y la asistencia brindada por el gremio. Pero, al mismo tiempo, también es necesario afirmar que hay un posicionamiento del gremio con respecto a la precarización, por el que se considera a estos trabajadores como municipales, sin distinguir el tipo de contrato o de vinculación a los municipios en los que trabajan. De hecho, los trabajadores precarizados son considerados miembros del sindicato, a pesar de que legalmente no puedan integrarlo. Al respecto, Santillán afirmaba en una asamblea: “(...) cuando entran y son precarizados, ya nosotros los empezamos a defender porque, cuando tienen convenio con el municipio, ya son municipales y los vamos a defender”<sup>13</sup>.

En el año 2013, mientras hacíamos trabajo de campo, Roberto, un municipal “histórico”, nos describía a los precarizados de la siguiente manera: “*Los precarizados son esos que ganan 400, 500, 600 pesos mensuales. ¿Qué persona vive con esa plata? Yo quisiera que un intendente o un comisionado viva con esa plata mensual. Y encima hace un mismo trabajo que hace un planta permanente, los mandan a hacer trabajo insalubre. El gremio ahora está llegando a toda esa parte*” (Roberto; entrevista Roberto y María Cristina). Los bajísimos salarios y la ausencia de beneficios (como cobertura social) son algunos de los aspectos que más indignación provocan entre los trabajadores. Sin embargo, la precariedad de estos trabajadores no sólo se vincula a los salarios y a los beneficios sociales, sino también a la incertidumbre de su situación dado que, una vez finalizados los contratos temporarios, el municipio puede decidir no renovarlo. Y, aunque mantenga su puesto, la incertidumbre continúa, dado que se trata de contratos temporarios: “*La intensa lucha que desplegó el SEOM en la comisión municipal de Yavi ante el despido de seis trabajadoras precarizadas, fue coronada con la firma de un acta compromiso por parte de las autoridades comunales y la dirigencia sindical, en la que se establece la reincorporación inmediata de cuatro de ellas, y para febrero, la de las dos restantes. El acta compromiso, sin embargo, aclara que las empleadas serán tomadas por dos meses, bajo el mismo sistema de contratación municipal (precarizado) por el cual venían prestando servicios, y por eso en marzo se iniciará un nuevo plan de lucha para garantizar la permanencia de estas compañeras en sus puestos*”

---

<sup>13</sup> SEOM Jujuy Facebook. Disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=kcmWE8evI4A&feature=youtu.be>  
Consultado: 08/2014



laborales”<sup>14</sup>. En este fragmento de parte de prensa se observa claramente este círculo de precariedad, en el que las trabajadoras temporarias se quedan sin trabajo y son recontratadas (de nuevo) temporariamente.

La temporalidad de los contratos no impide, empero, que los mismos no se extiendan en el tiempo. Así, desde el gremio han señalado que algunos precarizados se encuentran en la misma situación desde hace casi diez años. En este sentido, el vínculo con los trabajadores desocupados es señalado por los municipales: “*De desocupados han pasado a precarizados, ésta es la década de la precarización*” (intervención de Santillán en una asamblea), siguiendo el siguiente recorrido: Plan Social, Planta Transitoria, Jornalizado. Con la vuelta de Santillán al SEOM, comenzaron a elaborarse listados de precarizados por municipios y uno de los reclamos más fuertes que vienen llevando adelante es el pase a jornalizados de 8 horas y planta permanente de los precarizados.

De esta manera, en la actualidad, el SEOM viene ampliando la base de su representación gremial para incluir a los trabajadores precarizados. Los municipales están desarrollando diferentes acciones para visibilizar la situación de estos trabajadores, al mismo tiempo que el pase a planta permanente y el fin de la precarización son dos reclamos centrales del sindicato. En este sentido, la categoría municipal no sólo se está ampliando en términos descriptivos (es decir, relativo a quiénes son los trabajadores municipales y qué tipo de vínculo (contrato) poseen con los municipios), sino también en términos de lucha. Junto a la recomposición salarial y las jubilaciones, el fin de la precarización es otra de las banderas no sólo del SEOM, sino también del FGE.

Sin embargo, y tal como planteábamos anteriormente, el reclamo de terminar con la precarización debe ser nuevamente pensada en el marco de las tensiones entre la planta de empleados estatales y los fondos públicos disponibles. Tensiones que nuevamente remiten y hacen necesario considerar la estructura económica jujeña y el rol del Estado como generador de puestos de trabajo. Tal como sucedía en los '90 con los reclamos del FGE, las demandas de los municipales (planta permanente y precarizados) están cuestionando el presupuesto disponible para pagar los sueldos y, *también*, la propia estructura económica jujeña. Así, por

---

<sup>14</sup>SEOM Jujuy Facebook. Parte de prensa. Consultado: 07/2014

ejemplo, en el 2013, un parte de prensa celebraba “*Inédita y trascendente conquista gremial. Calilegua: el SEOM logra que concejales se bajen los sueldos para pagar a los precarizados*”<sup>15</sup>. Esta tensión entre trabajadores que demandan ser incorporados al Estado con contratos estables y los fondos públicos disponibles para pagar sus sueldos es, creemos, central en el caso jujeño.

### **La Organización Barrial Tupac Amaru: Creación de puestos de trabajo**

A diferenciadel SEOM, el relato histórico de la Organización Barrial Tupac Amaru es extremadamente pobre con respecto a las narraciones que intentan dar cuenta de su fortaleza actual, las cuales se remontan al año 2003 con la emergencia del Kirchnerismo. Los anuarios de la propia organización así como los artículos académicos sobre la misma coinciden en reiterar y celebrar cifras, como 70.000 afiliados, 8.000 viviendas construidas a lo largo de Jujuy y 5.000 puestos de trabajo creados posicionándose como segundo empleador en la provincia.

La Organización Barrial Tupac Amaru comienza a fortalecerse con la implementación, a partir del año 2003, del **Programa Federal de Emergencia Habitacional** dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. De acuerdo con las fuentes oficiales, este programa apuntaba a solucionar la emergencia habitacional y laboral, organizando a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar en cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas. De este modo, dicho programa comprendía acciones del Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que tiene a su cargo la inscripción y el registro oficial de las cooperativas así como la capacitación técnica de los integrantes de las mismas. A su vez, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social controla el procedimiento para la incorporación de beneficiarios del “Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados” a la industria de la construcción integrándolos a las cooperativas de trabajo. Desde los inicios de este programa, las organizaciones de desocupados conformaron numerosas cooperativas de trabajo y se dedicaron a la construcción de viviendas en distintas áreas geográficas de la Argentina.

---

<sup>15</sup> SEOM Jujuy Facebook. Parte de prensa. Consultado: 07/2014

En este marco, la formación de cooperativas también se convirtió en una forma, siempre parcial, de resolución de conflictos con movimientos y organizaciones sociales en distintas partes del país. Al respecto, en una entrevista que mantuvimos con un funcionario del Ministerio de Planificación, nos relataba que una parte sustantiva de su trabajo era intervenir sobre protestas, como cortes de ruta, procurando abrir un espacio de negociación con los manifestantes a cambio de “cupos” en cooperativas de vivienda.

Así las cosas, no ha sido solamente la Organización Barrial Tupac Amaru la que tomó parte del programa de Emergencia Habitacional, hecho que obliga a explicar por qué sobresalió por sobre los demás movimientos y organizaciones sociales del país. En un nivel, a partir de la construcción y provisión de viviendas se estableció una relación de marcada competencia entre la organización barrial Tupac Amaru y el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Durante nuestro trabajo de campo, técnicos y empleados de ese Instituto sostenían que la Tupac Amaru construía en cantidad pero con baja calidad; que no se encontraba sujeta a los controles sobre el gasto de dinero que el Estado nacional sí parecía tener sobre la provincia; y que destinaba exclusivamente el presupuesto recibido a la vivienda dejando otros costos, como el replanteo de suelo, en manos del gobierno provincial. Asimismo, las mismas cooperativas están asociadas para los funcionarios provinciales contactados al *conflicto, presión y vagancia* que habría traído consigo la existencia misma de la Tupac Amaru en la provincia. La cuestión de la baja calidad constructiva de las viviendas era en parte un problema reconocido por funcionarios del gobierno nacional, quienes fundamentaban esa situación aduciendo que parte del financiamiento había sido utilizado para “obra social”, como piletas, centros de salud y educativos. Por su parte, el movimiento Tupac Amaru instaba a ser controlado por el gobierno nacional y procuraba presentar públicamente su “rendición de cuentas”, invitando a funcionarios públicos u otras personalidades destacadas a recorrer conjuntamente el barrio construido en Alto Comedero.

En otro nivel, esta marcada relación de competencia y conflicto con el estado provincial parecer haberse manifestado también con cámaras de la industria de la construcción y el sindicato de los obreros de la construcción (UOCRA). En esta vinculación no solo tuvo incidencia la implementación del Programa Federal de Emergencia Habitacional en 2003 sino también la promulgación de la ley 5.574 de Emergencia de Edificios Escolares y



Hospitales en la provincia de Jujuy, marco que habilitaba la formación de cooperativas enmarcadas en organizaciones sociales para obras de mejoramiento y reparación edilicia. Como sostiene Gómez (S/F), se sucedieron los reclamos de la UOCRA aduciendo la pérdida de puestos de trabajo en el sector a raíz de la extensión de la creación de cooperativas de la Organización Barrial Tupac Amaru. Si bien la construcción dinamizó la creación de puestos de trabajo en esta organización, los mismos no estuvieron solamente afectados a la construcción directa de viviendas, sino también a la puesta en marcha, ya hacia el año 2007, de una fábrica de bloques, una textil y una metalúrgica orientadas a la producción de bloques, bachas, mesas, sillas, marcos de puertas y ventanas, parrillas, muebles y ropa de trabajo de todo tipo.

Gran parte de la bibliografía especializada se concentró en entender la relación de la Organización Barrial Tupac Amaru y el gobierno nacional en función de esta afluencia de recursos. No obstante, el trabajo de campo realizado también permite restituir sentidos y significaciones de las personas que dan vida al movimiento que remiten a relaciones más profundas y complejas. “Entrar a la Tupac” - proceso que se inicia siempre como aportante de una suma mensual de dinero y de colaboración en una copa de leche- se suele experimentar como el ingreso a un movimiento que “cambió a Jujuy”. Puntualmente, la percepción de cambio es espacial para el área Sur de San Salvador de Jujuy como es la zona de Alto Comedero. Se trata de una zona que comenzó a auto-urbanizarse hacia el año 1986, cuya fisonomía habría cambiado aceleradamente cuando la Tupac Amaru comenzó a construir viviendas y extender todos los servicios asociados a las mismas. Un grupo de mujeres que participa desde los inicios de la organización, recuerda que el entorno era un yuyal, y que con su propio esfuerzo hacían el pastón, cargaban carretillas, formaban ronda con palas para que no se seque, etc. En este sentido enfatizaban: “*tuvimos que desmalezar, encontramos de todo, bichos muertos hasta un feto*”. Con la llegada de la Tupac Amaru se solicitó también una oficina de correo postal y la extensión de las líneas de transporte público.

“*Entrar a la Tupac*” también connota una percepción de cambio asociada a la posibilidad de acceso a un conjunto de bienes sumamente significativos a los que comparativamente, de acuerdo con los relatos, era dificultoso acceder bajo otras relaciones. En este sentido, es frecuente que se pondere el acceso al trabajo junto con el acceso a una



vivienda, aduciendo que la falta de recibos de sueldo y de un nivel salarial adecuado no los tornaban candidatos para el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. *Entrar y permanecer* en la Tupac también permite el acceso a la atención médica, el costeo de velorios de integrantes del grupo familiar, y una experiencia educativa intensa mediante capacitación en oficios, o en el cursado de la escuela primaria, secundaria y terciaria. También posibilita el acceso a actividades culturales nucleadas en un centro especializado, donde los niños “destacados” en la escuela y en deportes denominados tupaqueritos reciben una mensualidad, y la participación en importantes complejos deportivos-recreativos.

“Entrar” y trabajar en la Tupac Amaru también se reviste de numerosas exigencias y obligaciones. En términos comparativos con el empleo público, la organización se realiza a sí misma planteando la manera eficaz con la que encuentra soluciones a los problemas de los jujeños. Por ejemplo, sobre las puertas de salida de la sede social de la organización en el centro de San Salvador de Jujuy, varias personas que ocupan cargos similares a porteros suelen correr tras los ancianos que salen del lugar preguntándole insistentemente: “doñita la atendieron”, y procurando acercarle un medio de transporte para que no camine en exceso. Trabajar en la Tupac también requiere comprometerse en el mantenimiento de una estética y en el cuidado de la higiene, que hace que los espacios de la organización contrasten fuertemente con la situación edilicia de las oficinas públicas que tuvimos la oportunidad de recorrer. Entrar y trabajar para la Tupac también requiere ser un trabajador movilizado, extendiendo frecuentemente las jornadas laborales con la asistencia a movilizaciones, tal como sucedió durante nuestra estadía de campo cuando se convocó a un acto por el cierre de la campaña del voto boliviano en el exterior.

Ahora bien, si prestar excesiva atención a la afluencia y circulación los recursos limita la posibilidad de entender otros sentidos que se juegan en el movimiento, es verdad también que esos mismos recursos imprimen una modalidad particular y diferencial a la experiencia en el movimiento. Hacia el octubre de 2014, varios integrantes “históricos de la organización”, es decir que están allí desde 1999, coincidían en que era el momento más crítico y difícil que habían vivido. Desde diciembre de 2013, la paga de la mensualidad había perdido su regularidad, y quienes nos acompañaban a recorrer los espacios de la organización se lamentaban de la merma de trabajadores en la bloquera, la metalúrgica, la textil, y las obras en

construcción. En ese contexto, solamente percibían de manera regular su salario los maestros y profesores de las escuelas, a quienes el ministerio de educación abona su sueldos, y otros, quienes debido a su antigüedad y compromiso con el movimiento era beneficiarios de una pequeña suma monetaria en concepto de capacitación, también cubierta con una partida presupuestaria del área de educación.

En ese contexto crítico se avivaba el contraste entre el empleo en el movimiento y el empleo en el sector privado, entendido como más estable, pero sobre todo con el empleo en el Estado. Algunos decidían permanecer en el movimiento porque tenían sus familias con trabajo en el sector privado y podían sostener esa situación. Otros porque no encontraban otros empleos y mantenían a la vez la creencia que en algún futuro su trabajo, como era el caso de las agentes sanitarias, sería reconocido por el sistema de salud oficial, pudiendo transformar el puesto de la organización en un puesto del Estado, con el correlativo aumento de la mensualidad de 2600 pesos a 6000 como esta tarea era remunerada en los centros de salud. Una joven nos confiaba en que estaba pensando en “salir” y otra mujer sostenía que la gente aprende a trabajar en el movimiento y luego busca otro lugar.

## **Reflexiones finales**

A lo largo de esta ponencia, que se asienta en nuestras investigaciones en curso en la provincia de Jujuy, hemos intentado dar cuenta de la riqueza y la complejidad de las experiencias actuales del sindicato SEOM y de la organización Tupac Amaru en su vínculo con el Estado. Partimos de un enfoque que valoriza la historia local jujeña, dando cuenta del origen común de ambas experiencias (el FGE, conformado a fines de la década de 1980) y resaltamos las particularidades de la estructura económica de esta provincia y de la importancia que ha ido adquiriendo el Estado como generador de puestos de trabajo. En este sentido, y a pesar de los cambios que se produjeron en esta primera década del siglo XXI, Golovanevsky y Schorr (2012) señalan que Jujuy ha atravesado una fase de “crecimiento sin desarrollo”, que no le permitió acabar con el “círculo vicioso de la pobreza” que la caracteriza. En este marco, el Estado sigue siendo uno de los más importantes generadores de empleo: para el año 2010, Aramayo y Sapag (2011) estimaban 62.500 empleados públicos de

administración central y municipios. Las experiencias consideradas dan cuenta de las diversas maneras en las que se sigue demandando al Estado jujeño por trabajo, sea a través de los reclamos de pase a planta permanente de trabajadores precarizados vinculados al SEOM o por medio de la creación de puestos de trabajo con fondos de políticas públicas en cooperativas y en distintos emprendimientos, replanteando el límite entre actividades que deben ser consideradas como trabajo estatal.

## **Bibliografía**

ARAMAYO, C. (2009) Jujuy en el bicentenario. Contexto e historia de luchas. Editorial Ágora, Buenos Aires.

ARAMAYO, C. y SAPAG, G. (2011) Evolución del Producto Bruto Geográfico de Jujuy y la realidad social. X Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

BARZOLA, V., LIRA, L., NASSANO, M. y OYARZO, L. (2013) Representación sindical en el empleo público. Ponencia presentada en el 11° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

BATTEZZATI, S. (2012) La Tupac Amaru: intermediación de los intereses de los sectores populares informales en la provincia de Jujuy. Revista Desarrollo Económico, Vol. 52, N° 205.

BERGESIO, L. y MARCOLERI, M. (2008) De siderúrgica a turística. Breve historia ocupacional de la ciudad de Palpalá (Jujuy – Argentina). Revista de estudios regionales y mercado de trabajo, N° 4.

CAMAÑO, M.J (2015): Modalidades de acción política en Jujuy: Estudio etnográfico de la Organización Barrial Tupac Amaru. Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Plan de Tesis de Maestría en Antropología Social.

FEIERSTEIN, D. (2012) Memorias y representaciones: sobre la elaboración del genocidio. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

FERRARI, F. (2015) La memoria municipal conmemorada: sindicalismo, identidad y experiencia de lucha en Jujuy. Tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

GOLOVANEVSKY, L. y SALA, G. (2001) Pobreza, vulnerabilidad, Programas de Empleo y conflictos sociales en Jujuy. En: <http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/utdt/pob2-9.pdf>

GOLOVANEVSKY, L., y SCHORR, M. (2012) Estructura productiva, distribución del ingreso y subdesarrollo. El círculo vicioso de la pobreza en Jujuy en la primera década del siglo XXI. II Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo.



GÓMEZ, E. y KINDGARD, F. (1998) Los cortes de ruta en la provincia de Jujuy – Mayo y Junio de 1997; PIMSA – Documentos y Comunicaciones 1998. Buenos Aires.

GÓMEZ, E. (S/F): Las cooperativas de vivienda en la provincia de Jujuy. Análisis de dos partes de la clase obrera a partir de la relación ocupados/desocupados.

IÑIGO CARRERA, N. y GÓMEZ, E. (2011) “Las organizaciones político-sindicales de los asalariados estatales organizan la lucha de los desocupados: Jujuy, 1994-2004”. En: Iñigo Carrera (Director), Sindicatos y desocupados en Argentina. 1930/1935 – 1994/2004: cinco estudios de caso. PIMSA – Dialektik 2011, Buenos Aires.

MANZANO, V. (2013) La política en movimiento. Movilizaciónes colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires. Prohistoria, Rosario.

OGANDO, A. (1998). Exclusión y pobreza. La otra cara del ajuste (El caso de la provincia de Jujuy). Ponencia presentada en el Primer Congreso Virtual de Antropología y Arqueología.

PIVA, A. (2009) Acumulación de capital y hegemonía en Argentina, Tesis doctoral, Doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes, Mimeo.